



Tribunal Supremo Electoral

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS.

Guatemala, dos de marzo de dos mil veintitrés.

Se trae a la vista para resolver, la solicitud planteada por el partido político **CAMBIO**, a través de su Representante Legal, Josué David Acevedo Ramírez, para la inscripción de candidatura para Diputados al Congreso de la República por Lista Nacional de: **Diputado Lista Nacional uno**, Manuel Antonio Baldizón Méndez; **Diputado Lista Nacional dos**, Jorge Eduardo Baldizón Vargas; **Diputado Lista Nacional tres**, José Conrado García Hidalgo; **Diputado Lista Nacional cuatro**, Begin Isaí López Maldonado; **Diputado Lista Nacional cinco**, Walter Erick Mendizábal Sandoval; **Diputado Lista Nacional seis**, Otilio Benjamin López Maldonado; **Diputado Lista Nacional siete**, Josué David Acevedo Rodríguez; **Lista Nacional ocho**, Jesús Valentín Pineda García; **Lista Nacional nueve**, Leonardo Camey Curup; **Lista Nacional diez**, Kristel Fabiola Arana Castañaza; **Lista Nacional once**, Héctor Armando Flores Villeda; **Lista Nacional doce**, Andy Marconi Guevara; **Lista Nacional trece**, Danilo Estuardo Melgar Peñate; **Lista Nacional catorce**, Mario René Martínez Campos; **Lista Nacional quince**, Alba Elisa Pineda Solares; **Lista Nacional dieciséis**, Brandon Josue Gatica Laguardia; **Lista Nacional diecisiete**, Jeffry Ottoniel Porres y Porres; **Lista Nacional dieciocho**, Amilcar Noe Ruano Tejada; **Lista Nacional diecinueve**, Abel Pérez Asencio; **Lista Nacional veinte**, Mario Gilberto Andino Dardón; **Lista Nacional veintiuno**, vacante; **Lista Nacional veintidós**, vacante; **Lista Nacional veintitrés**, vacante; **Lista Nacional veinticuatro**, vacante; **Lista Nacional veinticinco**, vacante; **Lista Nacional veintiséis**, vacante; **Lista Nacional veintisiete**, vacante; **Lista Nacional veintiocho**, vacante; **Lista Nacional veintinueve**, vacante; **Lista**

Nacional treinta, vacante; **Lista Nacional treinta y uno**, vacante; y, **Lista Nacional treinta y dos**, vacante; y,

CONSIDERANDO I

La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 136 y la Ley Electoral y de Partidos Políticos en su artículo 3, reconocen y garantizan los derechos políticos de los ciudadanos, como lo son: **a)** Respetar y defender la Constitución Política de la República de Guatemala; **b)** Inscribirse en el Registro de Ciudadanos; **c)** Velar por la libertad y efectividad del sufragio y pureza del proceso electoral; **d)** Elegir y ser electo; y, **e)** Optar a cargos públicos.

En lo concerniente al derecho de elegir y ser electo, la Corte de Constitucionalidad en reiterados fallos ha precisado que este implica un beneficio para quien participa a optar a un cargo público; sin embargo, también implica a cada ciudadano capaz, la delegación de una cuota de soberanía nacional; es decir que, el derecho de elegir y ser electo no debe ser limitado, salvo por la ausencia de requisitos para acceder a cargos públicos. En nuestra legislación, el acceso a funciones, cargos y empleos públicos se encuentra garantizado como un derecho eminentemente político y para el efecto, el artículo 136, inciso d) de la Constitución Política de la República de Guatemala dispone que, es un derecho y un deber del ciudadano optar a cargos públicos.

CONSIDERANDO II

La Ley Electoral y de Partidos Políticos en su artículo 157, inciso h), regula que es atribución del Director del Registro de Ciudadanos: "... Resolver, dentro de su competencia, las solicitudes de las organizaciones políticas..."; asimismo, en su artículo 216 estipula que: "... El Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos o su respectiva Delegación Departamental, al recibir la solicitud de inscripción,



Tribunal Supremo Electoral

la revisará cuidadosamente y la elevará, con su informe, dentro del plazo de dos días al Director de dicho Registro, quien deberá resolver...”.

CONSIDERANDO III

Para efectos de la inscripción correspondiente, el partido político **CAMBIO** el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, presentó de forma física el expediente de mérito ante el Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos; el que procedió a la revisión de la documentación del mismo y emitió el informe identificado con el número IICOP guion ciento dos guion dos mil veintitrés SAEA diagonal ms (IICOP-102-2023 SAEA/ms), de fecha veintiséis de febrero de dos mil veintitrés, informando que en virtud que a la solicitud de inscripción se acompañaron los documentos que refieren los artículo 214 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos y 53 de su Reglamento; 30 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos, Constancias Transitorias de Inexistencia de Reclamación de Cargos; así como, constancias de carencia de antecedentes penales y policiales, los cuales fueron verificados en los respectivos sistemas de consulta y demás documentos exigidos por la ley; exceptuando los de los candidatos postulados en las casillas dieciocho y diecinueve, por no presentar la documentación respectiva, y en consecuencia, dichas casillas quedan vacantes; de esa cuenta, solicitó a esta Dirección emitir la resolución que en derecho corresponda.

CONSIDERANDO IV

La norma fundamental del Estado de Guatemala es la Constitución Política de la República, en ella se encuentran inmersos los mandamientos diseñados por el legislador constituyente para dar forma al esquema institucional de la nación, su

organización política, social, económica, jurídica y cultural; y en su texto se configura el correcto ejercicio del poder público. No solo es Ley Suprema, sino también cualitativamente distinta de las demás normas, pues incorpora en la vida nacional los valores y principios elementales de convivencia socio-política, además de que cumple la función de presidir e informar la totalidad del ordenamiento jurídico guatemalteco; por ello, es preciso velar que se cumplan las obligaciones y deberes que la Constitución Política de la República de Guatemala ordena, y desde la óptica de los deberes previstos en los incisos b) y e) del artículo 135 de la norma suprema adquiere tal relevancia constitucional por ser de interés de la sociedad en su conjunto y no únicamente a una persona en lo individual.

De la revisión del expediente trasladado a esta Dirección el veintiocho de febrero del presente año, se observa que, se adjuntaron las Constancias Transitorias de Inexistencia de Reclamación de Cargos extendidas por la Contraloría General de Cuentas de Guatemala, la carencia de antecedentes penales y policiales de los candidatos a cargos de elección popular que aquí se conocen, advirtiendo que dichos documentos gozan de plena validez y vigencia a la presente fecha, así como, los contemplados en el Decreto número uno guion dos mil veintitrés (1-2023), emitido por el Tribunal Supremo Electoral el veinte de enero de dos mil veintitrés; y de esa cuenta, el Departamento de Organizaciones Políticas, mediante informe número IICOP guion ciento dos guion dos mil veintitrés SAEA diagonal ms (IICOP-102-2023 SAEA/ms), de fecha veintiséis de febrero de dos mil veintitrés, solicitando se emita la resolución que en derecho corresponda; sin embargo, siendo tarea de este Registro analizar, examinar, calificar y valorar en cada caso particular, con el propósito de privilegiar la concurrencia de los valores enunciados



Tribunal Supremo Electoral

constitucionalmente para quienes aspiren a desempeñarse en el ejercicio de la función pública, es preciso señalar que en el ámbito jurídico guatemalteco, el acceso a funciones, cargos y empleos públicos, sean estos electivos o no, se encuentra garantizado como un derecho eminentemente político por el Texto Supremo; para el efecto, el artículo 136, literal d), de la Constitución Política de la República de Guatemala, estipula que es un derecho y deber del ciudadano optar a cargos públicos; sin embargo, la Asamblea Nacional Constituyente también añadió, en complemento de la norma citada, la previsión regulada en el artículo 113 del Texto Constitucional que regula: *"... Los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez..."*. La concatenación de los preceptos constitucionales anteriores, permite inferir que la operatividad del derecho aludido viabiliza a los ciudadanos acceder a la función pública, cuestión en la que, por su propia naturaleza, adquiere especial relevancia el cumplimiento por quien pretende optar al ejercicio del cargo o empleo público de los requisitos habilitantes para el efecto, los cuales, en primer orden, se encuentran delimitados por la ley fundamental y desarrollados, seguidamente, en normas de rango constitucional y ordinario.

Dentro del expediente tres mil cuatrocientos veintidós guion dos mil diecinueve (3422-2019), la Corte de Constitucionalidad el catorce de mayo de dos mil veinte, en cuanto a la previsión establecida en el artículo 113 del texto constitucional indicó: *"... En relación al mérito de honradez, esta Corte ha considerado que el mismo constituye un requisito indispensable que deben llenar los ciudadanos que aspiran a ocupar algún cargo público de alta jerarquía, con el objeto de que los aspirantes a tal dignidad sean personas que de acuerdo a su comportamiento personal y profesional,*

tengan una conducta (manifestada en la voluntad de sus actos) que busque y procure la correcta interpretación de las normas o leyes sociales y jurídicas y, con ello, se evidencie su inclinación a la debida aplicación a lo justo o la justicia, lo que es bueno, lo que podría darles un determinado estado de honor u honorable; y por lo contrario, excluir a aquellas personas que atraídos por una falsa apariencia de justicia (o de lo bueno), su actuación tergiversen o altere las cosas para obtener un resultado contrario o prohibido por las leyes o las normas sociales y jurídicas. El Diccionario de la Real Academia Española define la honradez como: 'Rectitud de ánimo, Integridad en el obrar'; entendiéndose entonces que una persona honrada es la que actúa en forma proba, justa, recta, con integridad. (...); en relación al mérito de idoneidad, la Real Academia Española lo define como adecuado o apropiado o conveniente, para desempeñar determinados cargos o funciones dentro de una organización, refiriéndose a la aptitud, buena disposición o capacidad que algo o alguien tiene para un fin determinado. Los elementos anteriores, coadyuvan a determinar la honorabilidad de un ciudadano para ejercer un cargo de tan distinguida investidura, representando por este medio a la ciudadanía, por ello, cabe acotar que la honorabilidad, se deriva del vocablo honor, y se relaciona con la percepción de la conducta vinculada a lo bueno, por ende digna y de excelencia, además referido concepto está relacionado directamente con una trayectoria de honradez, rectitud de ánimo e integridad en el obrar, siendo justo e intachable en su conducta, en el cumplimiento de sus funciones y el compromiso mostrado en el desempeño de las mismas, en estricto apego a la ley y a la ética, lo anterior expresado desde el punto de vista objetivo, se refiere a la reputación de la cual una persona goza dentro de la sociedad...".

Asimismo, la Corte de Constitucionalidad en sentencia del veintiuno de enero de dos mil dieciséis, proferida dentro del expediente tres mil novecientos ochenta y seis guion dos mil quince consideró; "... la función pública inherente al cargo de Diputado al Congreso de la República es una de las más importantes entre las funciones públicas electivas que existen en el esquema político-jurídico guatemalteco, pues la labor



Tribunal Supremo Electoral

de los diputados coadyuva al mantenimiento del orden institucional idealizado por el legislador constituyente, aunado a que por su medio se concretiza la correcta organización jurídica y política del Estado, (...) en el ejercicio de ese cargo público, al igual en cualquier otro, resulta indispensable contar con una trayectoria intachable, que demuestre rectitud en el ánimo de obrar y que por ende, denote una orientación hacia lo justo, es decir, hacia la justicia, ello con estricto apego a la Constitución Política de la República de Guatemala y las demás leyes que integran el ordenamiento jurídico guatemalteco, pues el funcionario o empleado público, en el ejercicio de su cargo o empleo debe propender a vislumbrar el beneficio del conglomerado guatemalteco y no realizar acciones antijurídicas que resulten en detrimento del mismo...". La Honorable Corte de Constitucionalidad en el mismo sentido se pronunció dentro de los expedientes cuatro mil cincuenta y uno guion dos mil quince y trescientos ochenta y uno guion dos mil dieciséis.

Con base en las consideraciones anteriores y siendo de conocimiento público que el ciudadano Manuel Antonio Baldizón Méndez, postulado como candidato al cargo de elección popular de Diputado del Congreso de la República de Guatemala por el Listado Nacional en la casilla uno por el partido político CAMBIO, en el año dos mil diecinueve se declaró culpable ante la Corte del Distrito Sur de Florida de Estados Unidos de América, por la comisión del delito de lavado de dinero y fue condenado a cincuenta meses de prisión; y actualmente, en Guatemala se encuentra ligado a proceso penal por la comisión del delito de financiamiento electoral ilícito (caso bajo reserva judicial); y, ligado a proceso penal por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y cohecho pasivo; circunstancias que imposibilitan la inscripción del ciudadano Manuel Antonio Baldizón Méndez para la candidatura de Diputado al Congreso de la República por Lista Nacional casilla uno; toda vez que, para acceder a ese cargo resulta necesario cumplir, no solo con los requisitos previstos

en el artículo 162 de la Constitución Política de la República y no incurrir en las prohibiciones establecidas en el artículo 164 del magno texto, sino que además, deben observarse, por virtud del principio de unidad de la Constitución, las previsiones establecidas en el artículo 113 constitucional que regula los requisitos intrínsecos que deben reunir las personas que aspiran a cualquier cargo o empleo público (sea electivo o no), los cuales, como lo señala la norma constitucional, deben ser fundados en méritos de: a) capacidad; b) idoneidad; y c) honradez; por lo que, deberá declararse vacante la casilla número uno relacionada.

En cuanto a la inscripción de candidatura para Diputados al Congreso de la República por Lista Nacional de: **Diputado Lista Nacional dos**, Jorge Eduardo Baldizón Vargas; **Diputado Lista Nacional tres**, José Conrado García Hidalgo; **Diputado Lista Nacional cuatro**, Begin Isaí López Maldonado; **Diputado Lista Nacional cinco**, Walter Erick Mendizábal Sandoval; **Diputado Lista Nacional seis**, Otilio Benjamín López Maldonado; **Diputado Lista Nacional siete**, Josué David Acevedo Rodríguez; **Lista Nacional ocho**, Jesús Valentín Pineda García; **Lista Nacional nueve**, Leonardo Camey Curup; **Lista Nacional diez**, Kristel Fabiola Arana Castañaza; **Lista Nacional once**, Héctor Armando Flores Villeda; **Lista Nacional doce**, Andy Marconi Guevara; **Lista Nacional trece**, Danilo Estuardo Melgar Peñate; **Lista Nacional catorce**, Mario René Martínez Campos; **Lista Nacional quince**, Alba Elisa Pineda Solares; **Lista Nacional dieciséis**, Brandon Josue Gatica Laguardia; **Lista Nacional diecisiete**, Jeffry Ottoniel Porres y Porres; **Lista Nacional veinte**, Mario Gilberto Andino Dardón; resulta procedente su inscripción, y no obstante, que en las casillas **dieciocho** y **diecinueve** se propuso a los ciudadanos Amilcar Noe Ruano Tejada y Abel Pérez Asencio, respectivamente, éstas deberán declararse vacantes, en virtud de no haber



Tribunal Supremo Electoral

presentado los documentos correspondientes; y, las casillas de la veintiuno a la treinta y dos también deberán declararse vacantes, toda vez que, no postularon candidato para las mismas; por lo que así, deberá resolverse.



LEYES APLICABLES

Artículos citados, y: Los artículos 162 y 164 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 20 inciso a), 163 inciso d), 167 inciso d), 205, 212, 213 y 217 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos; 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 59 Bis, y 60 de su Reglamento Acuerdo número dieciocho guion dos mil siete (18-2007), 66 y 67 del Código Procesal Civil y Mercantil. y sus respectivas modificaciones.


POR TANTO

LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE CIUDADANOS, con base en lo considerado y leyes citadas **DECLARA: I. PROCEDENTE** la solicitud planteada por el partido político **CAMBIO**, a través de su Representante Legal, Josué David Acevedo Ramírez, en cuanto a la inscripción de candidatura para Diputados al Congreso de la República por Lista Nacional de: **Diputado Lista Nacional dos**, Jorge Eduardo Baldizón Vargas; **Diputado Lista Nacional tres**, José Conrado García Hidalgo; **Diputado Lista Nacional cuatro**, Begin Isaí López Maldonado; **Diputado Lista Nacional cinco**, Walter Erick Mendizábal Sandoval; **Diputado Lista Nacional seis**, Otilio Benjamin López Maldonado; **Diputado Lista Nacional siete**, Josué David Acevedo Rodríguez; **Lista Nacional ocho**, Jesús Valentín Pineda García; **Lista Nacional nueve**, Leonardo Camey Curup; **Lista Nacional diez**, Kristel Fabiola Arana Castañaza; **Lista Nacional once**, Héctor Armando Flores Villeda; **Lista Nacional doce**, Andy Marconi Guevara; **Lista Nacional trece**,

Danilo Estuardo Melgar Peñate; **Lista Nacional catorce**, Mario René Martínez campos; **Lista Nacional quince**, Alba Elisa Pineda Solares; **Lista Nacional dieciséis**, Brandon Josue Gatica Laguardia; **Lista Nacional diecisiete**, Jeffry Ottoniel Porres y Porres; **Lista Nacional veinte**, Mario Gilberto Andino Dardón. II. **Vacantes** las casillas: **uno, dieciocho, diecinueve y de la veintiuno a la treinta y dos**. III. Remítase el expediente de mérito al Departamento de Organizaciones Políticas para su anotación y así extender las credenciales que en derecho corresponden. IV. **Notifíquese**.


Sergio Estuardo Jiménez Rivera
 **SECRETARIO**
REGISTRO DE CIUDADANOS
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL




Lic. Ramiro José Muñoz Jordán
Director General
Registro de Ciudadanos
Tribunal Supremo Electoral





Tribunal Supremo Electoral

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala, siendo las ocho horas con cuarenta y ocho minutos, del día cuatro de marzo de dos mil veintitrés, en la once calle, cero guion sesenta y cinco, zona diez, edificio Viscaya, oficina cuatrocientos tres y cuatrocientos cuatro **NOTIFIQUÉ**, al partido político "**CAMBIO**", la Resolución número **PE-DGRC-354-2023 RJMJ/crrdl**, dictada por la Dirección General del Registro de Ciudadanos, mediante cédula que entregué a: Mario Acevedo; quien de enterado (a) de conformidad Si firmó. DOY FE.

(f) Mario Acevedo

NOTIFICADO (A)



Daniel Obando
Notificador
Dirección General del
Registro de Ciudadanos